

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 3.º

Remitido á informe de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorizacion negada por V. S. al Juez de primera instancia de Arnedo para procesar á Don Carlos Ocon, Alcalde del Redal, ha consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Esta Seccion ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Logroño ha negado al Juez de primera instancia de Arnedo la autorizacion que solicitó para procesar á D. Carlos Ocon, Alcalde del Redal:

Resulta:

Que con motivo de causa seguida contra D. José Royo por insultos dirigidos á D. Carlos Ocon, mandó proceder la Audiencia del territorio, al dictar sentencia en aquella causa, contra el Alcalde Don Carlos Ocon por el delito de detencion arbitraria que se le imputaba:

Que en cumplimiento de este mandato el Juzgado instruyó las oportunas diligencias sumarias, recibiendo declaracion á tres pastores que manifestaron haber sido llamados á la presencia del Alcalde, y haberles éste impuesto dos dias de arresto que cumplieron, por haber entrado con sus ganados á pastar en unos olivares donde no era licito penetrar:

Que el Juzgado sin más trámites, de acuerdo con el Promotor fiscal, y dando por supuesta la detencion arbitraria, pidió la autorizacion para procesar al Alcalde:

Que el Gobernador dispuso oír al interesado, quien manifestó que habia castigado con multa de dos duros á cada

uno de los pastores referidos por la falta que cometieron, viéndose despues precisado á imponerles el arresto como pena subsidiaria en razon á la insolvencia absoluta de los interesados; y conforme con el Consejo provincial, el Gobernador negó la autorizacion fundándose en que el Alcalde se habia limitado á castigar una falta dentro del círculo de sus atribuciones:

Visto el art. 488 del Código penal, que define como falta penable con multa el hecho de introducir ganados en sitio vedado y heredad ajena:

Visto el art. 504 del mismo Código, que autoriza para imponer á los penados con multa que fueren insolventes un dia de arresto por cada duro de que deban responder:

Vistas las disposicion 2.ª y 4.ª del Real decreto de 18 de mayo de 1853, que establecen que las faltas cuyas penas merezcan multa, podrán ser castigadas gubernativamente por la Autoridad administrativa á quien esté encomendada su represion, pudiendo ademas los Alcaldes imponer gubernativamente la pena de arresto por sustitucion y apremio de la multa cuando los multados fueren insolventes:

Considerando:

1.º Que la falta cometida por los pastores pudo ser castigada gubernativamente por el Alcalde con arreglo á las leyes:

2.º Que por lo mismo pudo haber lugar al arresto por via de sustitucion y apremio en vista de la insolvencia de los multados, y por el término correspondiente á la cantidad de la multa:

3.º Que no constando para suponer la perpetracion del delito de detencion arbitraria por parte del Alcalde, y por el contrario aparece justificada la conducta legal de éste por las razones expuestas, y porque los interesados no contradicen la manifestacion del Alcalde en cuanto al tiempo del arresto ni en cuanto á la insolvencia que le motivó, limitándose aquellos á expresar que fueron arrestados porque habian entrado con sus ganados en olivares ajenos:

La Seccion opina que debe confirmarse la negativa del Gobernador de la provincia de Logroño.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Seccion, de

Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1860.—Posada Herrera.—Señor Gobernador de la provincia de Logroño.

Remitido á informe de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorizacion negada por V. S. al Juez de primera instancia de Arnedo para procesar á D. Carlos Ocon, Alcalde del Redal, ha consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Esta Seccion ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Logroño ha negado al Juez de primera instancia de Arnedo la autorizacion que solicitó para procesar á D. Carlos Ocon, Alcalde del Redal:

Resulta:

Que á consecuencia de causa formada á D. José Royo por insultos á D. Carlos Ocon, al dictar sentencia la Audiencia del territorio mandó proceder contra dicho Alcalde por el cargo que le resultaba por haber dejado de perseguir una falta cometida por su hermano D. Sebastian, cuyos ganados habian penetrado en terrenos vedados:

Que en su consecuencia empezó el Juez las actuaciones contra el Alcalde, despues de conformarse con el Promotor, que reputó el caso libre de la autorizacion del Gobernador, porque la omision del Alcalde no procedia de funciones administrativas y sí judiciales, por lo cual se recibió indagatoria al procesado; se le mandó prender ó prestar fianza, y embargarle bienes á las resultas de la causa:

Que el Gobernador sostuvo la necesidad de la autorizacion, porque el hecho procedia de las funciones gubernativas del Alcalde, á quien compete castigar las faltas; y dado conocimiento al Promotor, conoció su primer error, rectificó su anterior censura y aceptó el parecer del Gobernador, mandando entonces el Juez, de acuerdo con el Promotor, reponer la causa á su principio y pedir la autorizacion:

Que del sumario instruido de antemano resultó, segun diversas declaraciones, que la falta cometida por los pastores del ganado de D. Sebastian Ocon, hermano del Alcalde D. Carlos, fué denunciada en union con otras al Teniente Alcalde del Redal por hallarse á la sazón ausente el Alcalde; y al regresar éste al pueblo, luego que se enteró de lo ocurrido por habersele quejado de que su hermano no habia sido castigado, resolvió inhibirse inmediatamente del asunto, ya porque la denuncia no habia sido hecha ante su au-

toridad, ya porque se trataba de un hermano suyo:

Que atendiendo á estas circunstancias, invocadas y probadas en el expediente por el interesado, el Gobernador negó la autorizacion por creerlo irresponsable del hecho que se le imputaba:

Considerando que el Alcalde D. Carlos Ocon no tuvo parte alguna en la omision que se le imputa por hallarse justificada su ausencia al tiempo en que se verificó la denuncia contra su hermano, y por haberse inhibido del conocimiento del negocio luego que llegó á su noticia en razon á los vínculos que le unian al denunciado.

La Seccion opina que debe confirmarse la negativa del Gobernador de la provincia de Logroño.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (que Dios guarde) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Seccion, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1860.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Logroño.

Visto el expediente de autorizacion negada por V. S. al Juez de primera instancia de Segura para procesar al Alcalde de Rillo Don Joaquin Vicente, y al Teniente Alcalde del mismo punto Don Urbano Villuendes, del que resulta:

Que el Alcalde de Pancrudo dirigió al primero de dichos funcionarios algunas comunicaciones solicitando su cooperacion para ejecutar sus providencias, tomadas en juicios de faltas contra vecinos de Rillo que habian cortado leñas y apacentado sus ganados en la dehesa de las Lomas, situada en el término jurisdiccional de Pancrudo:

Que así el Alcalde como el Teniente Alcalde de Rillo se negaron á prestar la cooperacion que se les pedia, fundándose en que no estaba acreditado que se hubiese acotado el terreno de la citada dehesa, y añadió el Alcalde que el Juez del partido habia dictado una sentencia revocatoria de la del Alcalde de Pancrudo en otros juicios de faltas análogas á los que habian promovido estas contestaciones:

Que el Alcalde de Pancrudo remitió al Juzgado los antecedentes querrelándose de la conducta del Alcalde de Rillo, y se probó por confesion del mismo que no existia la sentencia revocatoria de que habia hecho mérito, refiriéndose tan solo

segun manifestó, á lo que se decia de pública voz:

Que constales antecedentes, pidió el Juzgado la autorizacion de que se trata de acuerdo con el parecer del Promotor fiscal, fundándose en que procede aplicar al Alcalde de Rillo los artículos 226 y 228 del Código por haber cometido falsedad en la narracion de los hechos, y negarse á prestar la debida cooperacion para la Administracion de justicia, siendo en este concepto culpable tambien el Teniente de Alcalde, á quien le hizo extensiva la demanda de autorizacion:

Que V. S. la denegó entendiéndolo como el Consejo provincial que el Alcalde y Teniente de Alcalde obraron persuadidos de que cumplian con su deber defendiendo los derechos que sus administrados creen tener en la referida deuda, y que no puede imputarse delito de falsedad al primero porque no hubo mala fe en referirse á lo que de público se decia acerca de la providencia del Juzgado; sin embargo de todo lo cual impuso V. S. una multa á los dos funcionarios de quienes se trata, porque faltaron á las consideraciones debidas en un negocio á que estaba interesada la recta Administracion de justicia:

Visto el art. 226 del Código penal vigente, que señala la pena que corresponde al empleado público que abusando de su oficio cometiere falsedad, y en su caso 4.º declara que si cometiere falsedad faltando á la verdad en la narracion de los hechos:

Visto el art. 288 del mismo Código, que se refiere al empleado público que, requerido por la Autoridad competente, no preste la debida cooperacion para la Administracion de justicia u otro servicio público:

Considerando: Que en la serie de hechos que en este asunto aparecen, resulta que el Alcalde y Teniente de Rillo obraron por ignorancia y sin malicia aparente:

2.º Que así lo estimaron V. S. y el Consejo provincial competentes como ninguno para calificar las intenciones y los móviles de sus subordinados:

3.º Que el Alcalde de Rillo y su Teniente fueron sin embargo, castigados gubernativamente con una multa que les impuso V. S. por no haber guardado las debidas consideraciones á su colega de Pancrudo, que es la única falta de que verdaderamente resultan responsables:

4.º Que es inquestionable, que no existe delito de falsedad, cuando no hay ni puede haber malicia ni ánimo de delinquir:

5.º Que esta doctrina es aplicable igualmente á la falta que pudo haber cometido la Autoridad de Rillo respecto á los exhortos ó comunicaciones de la de Pancrudo:

6.º Que en la conducta observada por el Alcalde y Teniente de Rillo no se ocha de ver mas que un exceso de cooperacion por V. S.

Onto el Consejo de Estado en Seccion de Estado y Gracia y Justicia, S. M. I. la Reina (Q. D. G.) se ha servido negar la autorizacion de que se trata:

De Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de noviembre de 1860.—Posada Herrera.—Señor Gobernador de la provincia de Teruel.

Subsecretaría.—Seccion de orden público. Negociado 3.º—Quintas.

El Señor Ministro de la Gobernacion dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Alicante lo que sigue:

Enterada la Reina (Q. D. G.) de la comunicacion de 18 de noviembre último, en que V. S. dió cuenta á este Ministerio de un acuerdo por el que el Consejo de esa provincia admitió la redencion pecuniaria del servicio militar á un quinto cuya sustitucion habia sido declarada nula por haberse valido el sustituto de documentos falsos:

Visto el art. 148 de la ley de Reemplazos vigente:

Considerando que declarada nula una sustitucion, debe tenerse como no hecha para los efectos de admitir al sustituto la redencion:

Considerando que si bien este caso no está previsto en la ley, por el art. 148 citado se concede el beneficio de redimir su plaza al quinto propietario, cuyo sustituto se haya desertado dentro del primer año, y que con mas razon debe admitirse á aquel cuyo sustituto se haya valido de documentos falsos para probar su aptitud:

Considerando que no se irroga perjuicio alguno á los interesados ni al ejército en admitirles la redencion:

S. M. de conformidad con el dictamen de las Secciones de Guerra y Gobernacion del Consejo de Estado, ha tenido á bien aprobar el mencionado acuerdo del Consejo de esa provincia, y resolver por punto general que al quinto propietario cuya sustitucion se declare nula se le admita la redencion del servicio de las armas siempre que la solicite en el tiempo que previene la ley.

De Real orden comunicada por el expresado señor Ministro, lo traslado á V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1860.—El Subsecretario, Antonio Cánovas del Castillo.—Sr. Gobernador de la provincia de...

(Gaceta de 9 del actual)

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE HERRADORES, COMPRENDIDA EN LA GENERAL DE CABALLERIA,

aprobado por Real orden de 24 de setiembre de 1860, que se publica para conocimiento y gobierno de los que aspiran á ingresar en aquella, á cuyo fin los artículos llevan la misma numeracion que tienen en el Reglamento matriz.

TITULO PRIMERO.

De la escuela de Herradores.

Artículo 1.º La Escuela militar de Herradores formará como hasta aquí la 3.ª Seccion de la general de Caballeria, declarada desde la aprobacion de este Reglamento preparatoria de la ciencia de Veterinaria, en lo concerniente á su objeto especial.

Art. 2.º El objeto de esta Escuela es proveer de buenos Herradores á todos los institutos montados del Ejército y demas dependencias que tengan plazas montadas, á quienes el Gobierno considere conveniente dar estos auxilios. El número de alumnos, segun la fuerza montada permanente en la actualidad, será en su máximo de 160; y su maximum indeter-

minado para que se ajuste á las circunstancias alicjiores.

TITULO II.

De la enseñanza de los alumnos.

Art. 4.º Para que la instruccion que han de recibir los alumnos, esté en relacion con la general de la ciencia, con el tiempo que han de permanecer en dicha Escuela, y puedan despues completar sus estudios en las de Veterinaria, uniplo que hayan el tiempo de su servicio en el Ejército, cursarán en la referida Escuela militar de Herradores año y medio solar, dividido en dos cursos de nuevos meses cada uno; equivalente á dos años escolásticos, que emplearán en el estudio de las materias y en la forma siguiente:

Primer año.—Principiará en 1.º de octubre y estudiarán: elementos de algebra y geometría; anatomía general y descriptiva de los principales animales domésticos; exterior de los mismos; cirugía menor; nociones de apósitos y vendajes; arte de herrar teórico y práctico, y nociones de forjado.

Segundo año.—Fisiología; higiene; cirugía menor con nociones de apósitos y vendajes; arte de herrar teórico-práctico, y práctica de forjado.

Art. 5.º Las obras de texto por que estudiarán los alumnos de esta Escuela, serán las mismas que se usan en las Escuelas profesionales de Veterinaria.

Art. 6.º En fin del primer año, ó sea á últimos de junio, sufrirán solo examen de anatomía general y descriptiva de los animales domésticos y de exterior.

En 1.º de agosto siguiente principiarán el segundo año, que terminará en fin de mayo con los exámenes de Fisiología, higiene, cirugía menor, arte de herrar teórico y práctico, y forjado con herradura.

Los exámenes serán públicos. A los que resulten aprobados, se les expedirán sus correspondientes certificaciones. Las censuras que se aplicaran por el Tribunal serán las de sobresaliente, bueno, suspenso y desaprobado, entendiéndose aprobados los que obtengan cualquiera de las dos primeras.

Art. 7.º Para que los alumnos de esta Escuela disfruten de las ventajas que concede á todos los estudiantes en las clases civiles la ley de instruccion pública, y á los de Veterinaria en especial el art. 87 del Real decreto de 14 de octubre de 1857, en cuanto es compatible con los deberes del Ejército, que les dá la carrera á su costa, y lo que exige la equidad para los que se atrasan por enfermedad ú otras causas ajenas á su voluntad y sean declarados suspensos por el Tribunal de exámenes, se observará lo siguiente:

Primero. Los alumnos de primer año que sean declarados suspensos, continuaran repasando con el Catedrático de su año hasta fin de setiembre; sin perjuicio de empezar en agosto el curso de 2.º año; siendo examinados en fin de setiembre, quedando incorporados de hecho en el segundo año los que resulten aprobados.

Segundo. Los que del mismo modo sean declarados suspensos en los exámenes del 2.º año continuaran repasando con su propio Catedrático los meses de mayo, junio y julio, sufriendo en fin de este otro examen; y los que sean aprobados gozarán de las ventajas que concede este Reglamento.

Los alumnos suspensos que no se rehabiliten en el 2.º examen de fin de la carrera de repaso, serán expulsados de la Escuela con los reprobados, sin derecho á los beneficios de este Reglamento, y designados á los Regimientos que estime conveniente el Director general de Caballeria, pero con sujecion á lo que previene el art. 29, segun las circunstancias que en cada fin concurren.

La especialidad de esta Escuela, con la circunstancia de costear la carrera á los

alumnos, exige restricciones para que no se grave los intereses públicos, por lo que impone la expulsion á los reprobados; sin embargo, siempre que á algun alumno se le imponga aquella desfavorable censura, si procediere su falta de instruccion de una prolongada enfermedad, se consultará debidamente justificado el caso al Director general de Caballeria, el que, en vista de lo que resulte, podrá acordar la repeticion del curso, si la estima justo.

Art. 8.º Los aprobados en los dos años serán destinados á los Regimientos ó dependencias de institutos montados; pudiendo con la certificacion expedida por el primer profesor del Cuerpo en que sirvan y las que obtengan en la Escuela al ser examinados, pedir el ingreso en cualquiera de las de Veterinaria del Reino, luego que obtengan su licencia absoluta.

Art. 9.º Los aprobados en los cursos se les declararán ganados el 1.º y 2.º año de estudios de la ciencia Veterinaria, y tendrán derecho, terminado su servicio militar, á estudiar en las Escuelas profesionales de Veterinaria en un solo curso los años 3.º y 4.º de la carrera, obteniendo título de profesor Veterinario de segunda clase, si obtiene la aprobacion en el examen de curso y tesis. Los que despues de aprobados los referidos estudios quieran optar á la categoria de Profesores Veterinarios de 1.ª clase, pueden cursar la ampliacion de un año en la Escuela de Madrid, en la forma que previene el Reglamento de 14 de octubre de 1857.

TITULO IV.

De los alumnos Herradores.

Art. 19.º Los alumnos de la Escuela de Herradores podrán proceder á la clase de quintos, de la de voluntarios y de la de tropa en general de cualquiera instituto del Ejército; y en justa retribucion de la enseñanza gratuita que les dá el Estado, se entenderá, por regla general, que todos han de servir seis años la plaza de Herrador, á contar desde el dia que obtengan la aprobacion. Los sargentos y cabos renunciarán á su empleo. Todos han de reunir ademas las circunstancias que se marcan á continuación:

Art. 20.º Para tener ingreso en calidad de alumno Herrador se requiere:

Primero. Tener cumplidos 17 años de edad y no exceder de 50.

Segundo. Acreditar con certificacion correspondiente el estudio de las materias que comprende la primera enseñanza superior.

Tercero. Un certificado de buena conducta y certificacion de salud y robustez.

Todos estos documentos serán examinados, segun prescribió para la enseñanza de la ciencia de Veterinaria el art. 19 del Real decreto de 14 de octubre de 1857, y en armonia con el artículo 4.º de la ley de reemplazos de 30 de enero de 1856.

Los aspirantes procedentes de la clase de quintos, ó que sirvan en otras armas, están dispuestos de presentar los documentos que indica el precepto 5.º por que se desprende de su filiacion ó informe de los Geles.

Sin perjuicio de la exhibicion de los documentos indicados, serán reconocidos por los Oficiales de Sanidad militar, y examinados por los Catedráticos, que los aprobarán ó desaharán segun los grados de instruccion preparatoria que en ellos reconozcan.

Art. 21.º Los aspirantes que acrediten con certificacion competente haber cursado el 1.º ó mas años de la carrera de Veterinaria en cualquiera de las Escuelas profesionales, siempre que reúnan las condiciones de edad, salud y robustez que quedan determinadas, serán admitidos, abonándose aquellos estudios, empleándose en repaso en las clases y más esclusivamente en adquirir la sufi-

cientie teórica y práctica del Herrador.
 Aprobados en exámen de esta parte de
 el estudio serán destinados á Cuerpos.
 Art. 22. En término general, no se
 admitirá á ningún alumno sin que lo so-
 licite por escrito para que quede consig-
 nado su desempeño en la Escuela,
 con sujeción á la que prescribe este Re-
 glamento.
 Art. 23. Los que ingresen como vo-
 luntarios deberán hacerse precisamente
 por ocho años, y tendrán derecho á los
 mismos beneficios que á los de esta pro-
 vincia, á la dispensa el art. 21 de la ley de
 29 de noviembre de 1859, de redención
 del servicio militar, mas, si después de
 haber estado este tiempo, les faltase aun al-
 guno para completar los seis años de
 su servicio como Herrador, que fija el arti-
 culo 19 de este Reglamento, se les anu-
 lará en su justificación el aumento correspon-
 diente, firmando su conformidad los in-
 teresados.
 Art. 24. En cumplimiento del art. 20 de la
 ley de redención, y atendiendo á que se
 admiten en la Escuela á la edad de 17
 años, se practicará lo que sigue: Siem-
 pre que haya de admitirse algún alumno
 voluntario con 20 años de edad, el Sub-
 director de la Escuela general, conforme
 al art. 10 del Reglamento, aprobado en
 Real orden de 1.º de enero de 1860, para
 la redención de la citada ley, acudirá al
 Consejo de Gobierno de la Administra-
 ción de los fondos de redención, para que
 decida si ha lugar ó no á que obtenga
 el premio pecuniario de ocho años de em-
 peño. En la negativa el aspirante optará
 por ingresar ó no sin premio.
 Con los aspirantes que entren de 17
 años, se hará igual consulta cuando cum-
 plian los 20, para si ha lugar á que se les
 declare el premio correspondiente ó los
 años de empeño que les resten, en la
 forma que determinan los artículos 20 y
 21 de la citada ley.
 A los aspirantes de 17 años de edad
 se les enterará antes de su ingreso de
 esta eventualidad á que los sujeta la ley,
 para que opten por lo que les convenga.
 Art. 25. Los alumnos á quienes se
 declare el derecho á premio pecuniario,
 recibirán solo en el año 500 rs. vn. de-
 jando el resto en depósito, así como el
 plus y réditos que devenguen, para per-
 seibirlo todo al recibir la licencia abso-
 luta, según lo faculta el art. 25 de la re-
 citada ley.
 Art. 26. Los que ingresen en la Es-
 cuela, sujetos aun á quintas, y les toque
 la suerte, cuando esto suceda, cesarán
 en el goce de todas las ventajas pecu-
 niarias de su empeño, con sujeción á lo
 que determina el art. 20 de la misma ley.
 Art. 27. Los que fallezcan en el ser-
 vicio con derecho declarado á premio pe-
 cuniario, pasa éste á sus herederos, se-
 gún lo determina el art. 27 de la ley.
 Art. 28. Todo alumno, ó Herrador
 del Ejército, que cometa el delito de
 desertion, u otro por el que se le imponga
 la pena de presidio, queda de hecho es-
 cluido de la Escuela y absolutamente
 excluido de todos los beneficios de este
 Reglamento, así como lo está el premio
 pecuniario, por el art. 26 de la ley ya
 citada.
 Art. 29. Con los alumnos de la clase
 de paisanos que salgan de la Escuela an-
 tes de haber sido aprobados en los dos
 años de carrera, se observará lo siguiente:
 1.º Los que salgan por voluntad pro-
 pia, pero con buenas notas de conducta,
 perderán el tiempo servido, conservando
 el derecho al premio pecuniario, si lo
 hubiesen declarado.
 2.º Los que sean declarados ineptos
 para el estudio de la ciencia á que están
 dedicados, pero que hayan demostrado
 aplicación y observado buena conducta,
 no perderán el tiempo servido y el de-
 recho al premio pecuniario.

5.º Los que por su mala conducta y
 des aplicación sean expulsados de la Es-
 cuela, perderán el tiempo servido y el
 derecho al premio pecuniario.
 Art. 30. Los 500 rs. de que trata el
 artículo 25, se emplearán en la compra
 de libros, herramientas y demás ins-
 trumentos útiles que necesiten.
 Art. 31. A los alumnos procedentes
 de la clase de quintos y á los voluntarios
 que no tengan derecho al premio pecu-
 niario, siempre que obtengan su licencia
 absoluta limpia de nota, y la certifi-
 cación de práctica y aprovechamiento
 de que trata el art. 8.º expedida por el
 primer Profesor, ó el que haga sus veces
 en el Cuerpo en que ha servido, se les
 concederá y acreditará la pensión de 5
 reales diarios durante un año escolar, ó
 sean nueve meses, que necesitan para
 simultanear en las Escuelas profesionales,
 los cuales se cuentan desde 1.º de octu-
 bre á fin de junio inclusive.
 Art. 32. Para que tenga cumplido
 efecto la interior disposición, justifica-
 rán su existencia en la forma que lo ha-
 cen los retirados para cobrar sus haberes,
 en el punto donde exista la Escuela
 en que estén matriculados, á cuyo pie
 certificará el Director de aquella, que
 asiste á cátedra y continúa los estudios
 con aprovechamiento, sin cuyo requisi-
 to no le será abonado el beneficio dona-
 tivo que le concede S. M. en premio de
 sus servicios.
 Art. 33. A los que se consigne pre-
 mio pecuniario y sean declarados quintos
 con posterioridad, quedando sujetos á lo
 que dispone el art. 20 de la ley, se les
 capitaliza al tomar la licencia absoluta
 el capital y réditos que hayan devenga-
 do, y si no alcanzase á cubrir la pensión
 de 5 rs. diarios, por el tiempo que seña-
 la el artículo anterior, se les declara por
 el suficiente á cubrirla, expresándolo por
 nota en la licencia absoluta, con sujeción
 á lo que para el caso previene el mencio-
 nado art. 32 que precede.
TITULO V.
De los Herradores en ejercicio.
 Art. 34. Los Herradores destinados
 en plaza efectiva en Cuerpo, gozarán la
 gratificación mensual de 40 rs. líquidos
 sobre su haber, reclamados en los extra-
 ctos de revista.
 Art. 35. Como auxiliares de los Pro-
 fesores del Cuerpo de Veterinaria mili-
 tar, queda al cargo de éstos el darles la
 instrucción científica preparatoria con-
 veniente para poder simultanear con
 aprovechamiento en un año el tercer y
 cuarto de la ciencia; al efecto, á los Pro-
 fesores se les impone la obligación de te-
 nerlos diariamente una hora de cátedra,
 basando la enseñanza en las materias que
 comprenden los dos años que han de
 simultanear.
 Art. 36. Para desempeñar cumplida-
 mente su servicio y atender al adelanto
 de su instrucción, los Herradores estarán
 exentos de todo servicio que no sea el
 de herrado y asistencia de caballos en-
 fermos.
 Art. 37. A los Herradores que sean
 destinados á Ultramar para ejercer, por
 orden superior, y no por voluntad propia,
 se les abonarán dos años de servicio, con
 arreglo al art. 42 de la ley de reempla-
 zos de 30 de enero de 1856.
 Art. 38. Queda prohibida el que los
 Herradores asciendan á cabos ni sargen-
 tos, así como el que sean empleados de
 asistentes ni ordenanzas.
 Barcelona 24 de setiembre de 1860.—
 Hay un sello del Ministerio de la Guer-
 ra.—Aprobado por S. M.—O'Donnell.

SEGUNDA SECCION.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 639.

Gobierno.—Negociado 1.º

Recordando la remision de las propues-
 tas para Alcaldes Pedáneos en el bienio
 próximo.

Recuerdo á los Sres. Alcaldes de
 la provincia el cumplimiento de lo
 dispuesto en el art. 86 del Regla-
 mento para la ejecución de la ley
 municipal vigente: debiendo en con-
 secuencia remitir á este Gobierno,
 lo mas pronto posible, la propuesta
 de Pedáneos para el bienio próximo
 de 1861 y 1862 en favor de los
 sujetos que tengan mejores con-
 diciones para desempeñar dichos
 cargos.

Orense 19 de noviembre de 1860.

—Francisco Javier Camuño.

CIRCULAR NUM. 640.

Real orden, dictando varias disposiciones
 que han de tenerse presentes en la cele-
 bracion de las corridas de toros.

**El Excmo. Sr. Ministro de la Go-
 bernacion con fecha 22 de octubre
 último me dice lo siguiente:**

Habiéndose declarado por Real
 orden de 15 de marzo de 1851, di-
 rigida al Gobernador de la provincia
 de Malaga, con referencia á las cor-
 ridas de toros: 1.º que el empre-
 sario pueda fijar á su gusto el precio
 de las localidades: 2.º que la auto-
 ridad no tiene derecho á exigir otras
 localidades que el palco de la Pre-
 sidencia (en el cual debe tener asiento
 el gefe de la fuerza pública), los
 asientos necesarios para los oficiales
 de ésta y las entradas de los algu-
 aciles del ayuntamiento; y 3.º que
 la autoridad debe cuidar de hacer
 que los anuncios que se den al pú-
 blico se cumplan religiosamente: la
 Reina (q. D. g.) ha tenido á bien
 disponer que se comuniquen estas
 disposiciones á los Gobernadores
 de las provincias para su conoci-
 miento y efectos correspondientes.

**Lo que se inserta en este periódico
 oficial para su debida publicidad,
 Orense 15 de noviembre de 1860.—
 Francisco Javier Camuño.**

**Continúa la lista de la suscripcion de
 acciones al ferro-carril de Galicia,
 titulado del PRINCIPE DON ALFONSO.**

SUSCRITORES.	Núm.º de acciones	Su valor. Rs. vn.
Suma anterior...	1,710	5,420,000
Señores Don:		
Juan Bautista Colme- nero.	1	2,000
Indalecio Pazos.	1	2,000
Camilo Rodz. Arias.	4	8,000
Ricardo Rodz. Arias.	5	10,000
José Lorenzo Suarez.	1	2,000
Manuel Gonzalez Ojea.	2	4,000
José Rodriguez Fer- nandez.	1	2,000
Miguel Mercuras.	1	2,000

Juan Carvallo.	2,000
Fr. Santiago Montoya.	2,000
Pedro Rodriguez.	2,000
Manuel Menor.	2,000

TOTAL hasta la fecha. 1,750 3 460,000
 (Se continuará.)

**ADMINISTRACION PRINCIPAL
 DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTA PROVINCIA.**

Esta Administración, en virtud de or-
 den superior, saca á pública subasta por
 tres años los derechos de consumos del
 Ayuntamiento de Paderne bajo las con-
 diciones siguientes:

1.º El arriendo será por tres años
 contados desde el día 1.º de enero de
 1861 hasta 31 de diciembre de 1863:
 comprende los derechos de consumos de
 vino comun del reino, vinos generosos de
 todas clases, vinagre, aguardiente y li-
 cores, aceite de oliva, jabon duro y blan-
 do y carnes muertas y en vivo.

Los derechos son los correspondientes
 á población de hasta 5,000 habitantes á
 que pertenece dicho pueblo de Paderne,
 y se satisfarán con arreglo á la tarifa nú-
 mero 1.º de las unidas á la ley de 25 de
 noviembre de 1859.

2.º La base para esta subasta que
 debe verificarse con exclusiva en las ven-
 tas es la cantidad de 10,990 rs. señalada
 por esta Administración en virtud de or-
 den superior de la Direccion general de
 Consumos fecha 7 del actual, y se com-
 pone de las parciales siguientes:

ESPECIES.	Importe, del derecho de las tarifas.
Vino.	5,552
Acete.	210
Carnes.	4,724
Aguardiente y licores.	500
Jabon.	489
Vinagre.	55
Total.	10,990

Total de los derechos que se calculan
 en cada un año y servirán de tipo en la
 subasta.

3.º El arrendatario recabará desde
 el día en que empieza á regir el arriendo
 en union precisamente con los derechos
 del Tesoro, los arbitrios municipales y
 provinciales que estén concedidos ó se
 concedan sobre las especies sujetas al
 impuesto; bajo el concepto de que así
 como por los derechos ha de satisfacer
 el precio estipulado en la subasta, por los
 arbitrios ha de hacerlo no de lo que por
 ello se recaude, sino la cantidad propor-
 cional correspondiente al arriendo.

4.º La subasta constará de un solo
 remate, admitiéndose todas las proposi-
 ciones que se presenten y cubran la can-
 tidad de los expresados 10,990 rs. por
 cada un año, sujetándose el arrendador á
 todas las condiciones de este pliego.

5.º Tendrá lugar la expresada subas-
 ta en Orense, Administración de Hacien-
 da pública, y en dicho pueblo de Paderne
 ante el Alcalde el día 30 del actual.

6.º Las proposiciones se harán en
 pliego cerrado previo el depósito del 2
 por 100 de los expresados 10,990 rs.

7.º En el caso de resultar dos ó mas
 pliegos con iguales proposiciones, se ad-
 mitirán pujas verbales durante un cuarto
 de hora á los sujetos por quienes estén
 suscritas.

8.º El arrendatario queda subrogado
 con los derechos y acciones de la Hacien-
 da pública en los ramos que comprende
 el contrato.

9.º La cobranza de los derechos y
 medidias fiscales para asegurarla, se su-
 jetará á las tarifas y reglas establecidas
 para la Administración si lo verificase
 la Hacienda.

10. Las cuestiones que se susciten

entre los contribuyentes y el arrendatario serán resueltas por el Alcalde de Paderno, sin perjuicio de recurrir el que se considere agraviado á la Administración de la provincia ó al juzgado especial de Hacienda, según sea el caso gubernativo ó contencioso.

11. El arrendatario no podrá negar los conciertos á los labradores, cosecheros ó fabricantes del término municipal domiciliados á mayor distancia de dos mil varas castellanas con arreglo á los usos establecidos ó que se establezcan, y por los medios que expresa la Real Instrucción de 24 de diciembre de 1856.

12. El arrendatario está obligado á presentar los libros y registros que lleve en el momento que sean reclamados por la Administración de provincia, y en el caso de negarse á ello le parará el perjuicio que haya lugar.

13. En los cinco primeros días de cada mes verificará el arrendatario el pago correspondiente al importe de una mensualidad por los derechos del Tesoro y recargos autorizados. La respectiva á municipales también anticipada, deberá ingresarse en la depositaria del Ayuntamiento, expidiéndose al arrendatario el correspondiente recibo con el V.º B.º del Alcalde y sello del Ayuntamiento, el cual presentará en la Administración.

14. Llegado el día 12 sin haber presentado los documentos expresados ni hecho el pago en la Tesorería de la provincia, se acordará la intervención del arriendo sin perjuicio de aplicar á él la fianza que debe prestarse en los términos expresados en la condición 25.

15. El arrendatario con arreglo al artículo 27 del Real decreto de 15 de diciembre de 1856 no puede deducir del importe de los recargos el 10 por 100 de Administración, puesto que la Hacienda y los partícipes han de percibir íntegro el precio estipulado.

16. El arriendo se recibe á suerte y ventura, y por consiguiente el arrendatario no tendrá derecho en ningún caso á solicitar rebaja de la cantidad estipulada.

17. Si ocurriesen alteraciones en las tarifas, se aumentará ó disminuirá la cuota del arriendo en la proporción debida sin que por esto pueda alterarse ni rescindirse el contrato.

18. La Hacienda pública se compromete á prestar al arrendatario el mismo auxilio y favor que en iguales casos presta á la Administración que hubiese en su lugar.

19. Concluido que sea el acto del remate, no se admitirá despues ninguna proposición, sean cualesquiera las ventajas que por ella se ofrezcan.

20. Si la aprobación de la subasta se difiere por mas de un mes contado desde el día del remate, el licitador podrá retirar su proposición quedando libre de todo compromiso. Si no toman posesión del arriendo por falta de fianza ó otras causas producidas por su culpa, perderá el previo depósito, sin perjuicio de sufrir los procedimientos ejecutivos contra cuantos bienes se le conozcan hasta que queden resarcidos los perjuicios que experimente la Hacienda por dicha falta.

21. Aprobada que sea la subasta por la Dirección general de Consumos, sin cuyo requisito no causará efecto, y devuelto el expediente á la Administración, el arrendatario, en cumplimiento del contrato, afianzará en metálico con el importe de lo que deba satisfacer á la Hacienda y los partícipes por cuatro mensualidades, quedando por consiguiente obligado á la ampliación de la fianza si dichos recargos no estuviesen autorizados el día que la constituya, lo mismo que si estándolo se aumentase el tanto de los recargos ó el de los derechos del Tesoro. Para la ampliación de la fianza, se fijará el término improrogable de un mes, y transcurrido éste sin variación, tendrá lugar la intervención del contrato,

dándose cuenta previamente á la Dirección.

También será admitida la fianza en títulos al portador de la Deuda consolidada ó diferida valorada según la cotización de la Bolsa del día anterior al del depósito. Y por último, puede afianzar en fincas rústicas libres de toda otra hipoteca, capitalizándose su valor por el 5 por 100 de la renta líquida, y con el aumento de una tercera parte, estendiéndose la escritura con las formalidades que exigen las órdenes vigentes para responder del importe del arriendo.

22. La fianza, si consistiese en metálico ó en papel, se devolverá íntegra y sin la menor detención al arrendatario, tan luego como finalizado el arriendo quede solvente y libre de toda responsabilidad. Si la fianza consiste en fincas, se cancelará la escritura sin más detención que la precisa para observar los trámites que al efecto previenen las instrucciones vigentes.

23. Cuando el arrendatario no cumpla lo estipulado en las condiciones que preceden, retardando el pago de la mensualidad corriente desde el día 5 en que vence hasta el 15 del mismo mes, se recargará al importe del débito un 6 por 100; pero si pasase el 15 sin verificar el pago, se hará efectivo el descubrimiento del importe de la fianza, si ésta es en metálico ó en papel de la Deuda, interviniéndose los productos del arriendo hasta que se reponga el depósito. Si fuese en fincas se procederá al embargo de ellas en fin de mes.

Para la venta de los títulos, que ha de hacerse en Madrid por medio de los agentes de la Bolsa, la Administración levantará el depósito, entendiéndose de oficio con la Dirección general de Depósitos, á quien remitirá la carta de pago, y del resultado del cambio, de que remitirá nota el Agente, no podrá reclamar el interesado arrendatario.

Transcurrido un mes, despues de intentados los procedimientos sin que el arrendatario solvente su descubrimiento ó complete su fianza, se declarará en quiebra el arriendo y administrará la Hacienda, con intervención del interesado, sobre quien recaerán todos los perjuicios que se irrogasen, ya por el menor valor que se obtenga de las nuevas subastas por el tiempo concertado, ya porque los productos de la Administración no rindan la cantidad por que se estipuló el arriendo, y ya por los gastos y costas que originen los procedimientos, que en caso preciso se llevarán contra cuantos bienes sean conocidos como de la propiedad del deudor.

24. Los gastos de la escritura, copia de la misma, diligencias del remate y honorarios del Escribano, serán de cuenta del arrendatario.

25. Bajo las precedentes condiciones, subrogará la Hacienda pública en favor del arrendatario los derechos y acciones que á la misma competen, prestándole su protección y auxilio en cuanto lo necesite, siempre que sus reclamaciones estén basadas en las reglas que se consignan en la instrucción, aprobada en 24 de diciembre de 1856 y aclaraciones posteriores concernientes al régimen y cobranza del impuesto sobre consumos, ó cuya disposición se obligará el arrendatario á sujetarse en el desempeño de su cargo.

Orense 17 de noviembre de 1860.—P. S., Antonio Zaldívar.

Modelo de proposición.

Don F. de T., vecino de por sí ó á nombre y representación de enterado de las condiciones con que se rematan los derechos de consumos en el pueblo de Paderno por los años de 1861, 1862 y 1863, ofrece por cada uno la cantidad de pagada en las épocas, modo y forma que las mismas determinan.

Fecha y firma.

TERCERA SECCION.

Juzgado de paz de Orense.

Don Venancio Moreno, Dr. en jurisprudencia y juez de paz de la ciudad de Orense.—Hago notorio qua en este juzgado se han sustanciado autos de juicio verbal, promovido por Francisco Fernandez contra Bernardo Acuña, en los cuales recaó la sentencia definitiva que se copia:

«En la ciudad de Orense á 9 de noviembre de 1860, el Sr. Dr. D. Venancio Moreno, juez de paz de la misma y su distrito municipal, habiendo visto estos autos de juicio verbal, promovido por Francisco Fernandez, vecino de Santa Maria de Sacos, de calida de Colobad, y residente en esta ciudad, contra Bernardo Acuña, vecino de ella;

Y resultando que el demandante Francisco Fernandez reclama al demandado Bernardo Acuña 224 rs. que, como oficial, devengó trabajando treinta y dos días á 7 rs. cada uno en el taller de carpintería de Acuña, á calidad de deducir legítimas datas;

Resultando que por no haber comparecido el demandado Acuña, citado en su persona para el juicio, se continuó éste en su rebeldía, y que presentados por el autor los testigos José do Porto, José Cerviño, y José Fernandez, de sus declaraciones conformes aparece: que el demandante estuvo trabajando los treinta y dos días que expresa en el taller del demandado; habiendo además depuesto Porto que el jornal de los oficiales carpinteros no baja de 7 rs.; Cerviño que el demandante acostumbra ganar 7 rs. diarios como todos los de su oficio que saben la obligación como él, y Fernandez que el mismo autor suele ganar 7 rs. diarios, lo mismo que todos los oficiales de carpintero que saben el oficio como el autor;

Considerando que estas declaraciones, apreciando su fuerza probatoria según las reglas de la sana crítica, conforme á lo prescrito en el art. 317 de la ley de enjuiciamiento civil, justifican suficientemente que el demandante estuvo trabajando como oficial en el taller del demandado treinta y dos días, que por cada uno debe abonarle 7 rs., los cuales importan los 224 rs. reclamados, y que el crédito se convalence en la misma rebeldía de Acuña, sin presentarse á deducir excepción alguna, no obstante de habersele citado personalmente, y con la que motiva mayores costas, de que debe ser responsable, por antemí secretario dijo:

Que debe de condenar y condenar al referido Bernardo Acuña á que pague á su demandante Francisco Fernandez, con las costas, los 224 rs. que le reclama; así por esta sentencia definitivamente juzgando, lo mandó, pronunció y firma el referido señor juez, de que yo secretario certifico.—Venancio Moreno.—Francisco Dominguez, secretario.»

Y para que, conforme á lo prescrito en el art. 1190 de la ley de enjuiciamiento civil, tenga efecto su inserción en el Boletín oficial de esta provincia, se expide el presente. Dado en Orense á 12 de noviembre de 1860.—Venancio Moreno.—Por mandado del señor juez, Francisco Dominguez, secretario.

Ayuntamiento de Orense.

Por acuerdo del ilustre Ayuntamiento se saca á pública subasta la construcción de 44 nichos en el cementerio público de esta capital.

Ademas de las condiciones generales de la obra que con el correspondiente diseño estarán de manifiesto en la Secretaría de dicha Corporación, regirán para la expresada subasta las siguientes:

1.ª La subasta tendrá efecto en la Casa Consistorial el domingo 2

de diciembre próximo ante esta Autoridad con asistencia del Regidor Sindico y Secretario del Ayuntamiento, y de doce á una de su mañana se admitirán las proposiciones en pliegos cerrados, arregladas al modelo adjunto, los que se rubricarán y numerarán por el orden de su presentación, y por el mismo serán abiertos, transcurrida dicha hora.

2.ª No será admisible proposición que altere las condiciones, ó exceda del tipo de 6.681 reales que se señala para la totalidad de las obras.

3.ª Tampoco será admisible ni abierto pliego alguno que no le garantice persona de notoria responsabilidad á juicio del Sr. Alcalde, ó que no presente carta de pago que acredite el depósito en la de este Ayuntamiento de una cantidad en metálico igual á la cuarta parte de la que queda señalada como tipo.

4.ª Abiertos y leídos dichos pliegos, quedará hecha la adjudicación de la obra á favor de la proposición mas ventajosa; y si resultasen iguales dos ó mas, se considerará provisionalmente como mas ventajosa la primeramente presentada, procediéndose en seguida á una licitación oral entre las mismas por espacio de un cuarto de hora; transcurrido el que y dadas las voces de costumbre quedará definitivamente adjudicada al mas ventajoso postor, y á falta de este, del que fué considerado provisionalmente como de mejor proposición. Orense 14 de noviembre de 1860.—El Alcalde, Marqués de Leis.

Modelo de proposición.

Don N. N.... que vive.... enterado del anuncio para la subasta de la obra de 44 nichos en el cementerio público de esta capital, se compromete á su construcción bajo las condiciones que ha reconocido, por la cantidad de.... (en letra) rs.

Fecha y firma del proponente.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE ORENSE.

Vencido ya el plazo para satisfacer el importe de las bulas expendidas por la predicación del corriente año, se halla esta Administración en el deber de recordarlo á los señores Alcaldes y Colectores de las parroquias para que procuren por los medios que les dicte su prudencia el que los pueblos concurren á satisfacer lo que adeudan por las que se hayan expendido, sin dar margen á apremios que evitarán siempre que buennamente vayan entregando la mitad á cuenta si es que no pudieren hacerlo del todo en una sola vez, confiando en que no darán el disgusto á esta Administración de tener que librar despachos, á cuyo efecto se dirige muy en particular á las Autoridades municipales para que con su acreditado celo activen dichos pagos; al propio tiempo que los señores parrocos se servirán persuadir á sus feligreses de lo ventajoso que les es el pagar sin sufrir los dispendios de una ejecución. Se advierte que las bulas sobrantes se admiten desde el día 1.º de febrero hasta 31 de abril.

Orense noviembre 15 de 1860.—Ramón Ariza y Lamas.